

El conocimiento de nuevos trazos de corrupción en el Hospital Departamental de San Andrés alertados por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y por una severa medida cautelar de parte de la –nada más y nada menos– poderosa División de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda; puso de manifiesto un secreto a voces en las islas: los fantasmas de la inmoralidad y el desgreño seguirían rondando con vigor en la administración del sistema de salud de las islas.

Según la dependencia reguladora de la Hacienda Pública, los cargos esta vez se formulan y se suspende el giro de recursos del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) por el “incumplimiento del Departamento Archipiélago en realizar dicha suscripción antes del 30 de abril, según lo pactado con el Ministerio de Salud”. En otras palabras, llevamos más de seis meses gastando a cuenta de un plan sin respaldo documental.

En ese mismo orden de ideas la PGN reveló que la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina habría entregado la infraestructura médico-asistencial del Departamento, para su explotación gratuita a la célebre Salus Global y a la actual operadora Sermedic IPS para la venta de servicios de salud en las islas, lo cual les generó ingresos por más de 38 mil millones de pesos al año. ¿Explotación gratuita? ¿A cuenta de qué?

En efecto, el Ministerio Público señala, que se encontraron indicios que podrían determinar la existencia de graves irregularidades contractuales en el convenio interadministrativo firmado (¿cuántas veces?) entre la Gobernación y la IPS Universitaria de Antioquia. Según el ente, el convenio fue asignado de manera irregular –mediante contratación directa– a dos IPS privadas, que hasta el momento los han explotado *a piacere.*

Por ejemplo, con la firma del convenio interadministrativo la IPS se comprometía a invertir $105 millones mensuales en mantenimiento preventivo de los bienes entregados en concesión; pero

–afirma la procuraduría– “no se evidencian a la fecha soportes del cumplimiento de dicha obligación y los hospitales (de San Andrés y Providencia) se encuentran muy deteriorados”. Sin mantenimiento ni reposición suficiente de la dotación. Eso se ve y se siente a leguas.

Por último, en el informe, el Ministerio Público también advierte la presunta irregularidad en la que habría incurrido IPS Universitaria al comprometerse con Sermedic IPS para conseguir que el Departamento le subsidie su operación como IPS privada logrando que en menos de dos años, la entidad territorial le gire recursos públicos por más de 8 mil millones de pesos, sin considerar la deficiente prestación de los servicios de salud. Un negocio redondo.

El 8 de agosto de 2018 en el primer día de su mandato, el Presidente Iván Duque, cumpliendo una promesa de campaña visitó el hospital de San Andrés comprobando en vivo y en directo las venas abiertas de la salud isleña. En efecto, el Clarence Lynd Newball y el local de Providencia, atravesaban una situación de anemia terminal. Hoy, tras catorce meses de marchas y contramarchas, las cosas parecen haberse desbordado en el tiempo.

Pero quizás haya algo bueno dentro de todo este panorama sombrío. Que estos hallazgos denunciados por las entidades de control estallen justo antes de la llegada del nuevo Gobierno Departamental y en pleno empalme, le dan un margen pequeño –pero margen al fin– de maniobra al mandatario entrante para ingresar bisturí en mano a extirpar el tumor que todos parecen conocer. Aunque el mal no se localice precisamente en la sala de cirugía.